

**Comicios locales y conflictos poselectorales en los pueblos del Centro y Sur de México,  
1856-1910**

Dra. Leticia Reina Aoyama

**Investigadora de la Dirección de Estudios Históricos  
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.**

**Mail: [reina.leticia3@gmail.com](mailto:reina.leticia3@gmail.com)**

El fenómeno de las elecciones locales (municipales), sobre todo entre la población indígena de algunas entidades federativas, tiene el interés analítico de mostrarnos otras dimensiones de la sociedad más allá de la esfera política, por ello presentaremos un análisis de los conflictos que los sufragios locales provocaron y lo que estaba en juego detrás de los comicios. Por lo regular, estas movilizaciones expresan viejos agravios no resueltos y nos permiten conocer parte de la compleja situación social, económica y política de las comunidades de diferentes regiones indígenas del centro y sur mexicano.

El interés renovado por parte de la población rural, en los comicios del Porfiriato, se expresa en su participación creciente al solicitar la instauración de los colegios electorales, nombrar a sus representantes mediante el sufragio universal y no por medio de “usos y costumbres”, y en el incremento de los conflictos poselectorales hacia el umbral de la Revolución Mexicana de 1910.

No obstante, en este trabajo se abordará la manera como los pueblos indígenas de algunas entidades federativas de la República Mexicana elegían a sus autoridades en el periodo del Porfiriato. Interesa destacar la permanencia del sistema de elección de autoridades locales por medio de usos y costumbres al finalizar el siglo XIX y su alternancia con el sistema liberal de voto secreto, para mostrar que los dos sistemas no se sucedieron en el tiempo, no se presentaron de manera excluyente, sino que se dieron de manera coyuntural.

Al mismo tiempo expondremos que los pueblos indígenas, mediante el sistema liberal de elección de autoridades y la demanda de respeto al voto ciudadano, no sólo se articularon al sistema político nacional, sino que también renovaron su propia estructura política local y regional ya anquilosada al cambio de siglo, igual que como se presentaba el fenómeno a nivel estatal y nacional.

## Breve reflexión teórica e historiográfica

Los trabajos de investigación sobre los comicios locales y los conflictos poselectorales son relativamente escasos y datan de épocas muy recientes, sobre todo aquellos que conciernen a los pueblos indígenas del centro y sur de México durante el Porfiriato. Además, el análisis de las formas de elección de autoridades entre los pueblos indígenas del México Porfiriano lo hemos enfocado desde la esfera subjetiva de la cultura política, como lo define Esteban Krotz. Y una de las perspectivas importantes de estudio que abre este autor, es la relacionada con los aspectos que definieron la “entrada de votantes heterogéneos, en el mundo supuestamente homogéneo, de la representación moderna”. (Krotz, 1993:30.) De esta manera podremos aproximarnos a entender la forma como los pueblos indígenas, con cultura e historicidades diversas se incorporaron a un proceso de elección diferente a su tradición.

Así mismo el estudio de las elecciones, verdaderas o ficticias, reales o fraudulentas, resulta de suma importancia porque permite pulsar la relación entre poder y sociedad ya que, como dice Silvia Gómez Tagle, son “un espacio de negociación más que un terreno de lucha por el poder político con reglas bien definidas”. (Tagle citado en Krotz, 1993:15) Por lo tanto, los comicios son un indicador o una especie de pulso social de descontento y de pérdida de representatividad de las autoridades locales. Es decir, constituyen una nueva forma de lucha por parte de los pueblos indígenas y campesinos para renovar las estructuras de poder local y con ello lograr objetivos que no consiguieron mediante las luchas agrarias en las primeras décadas del periodo republicano.

Luego entonces, las movilizaciones en torno al fraude electoral fueron una más, de las diferentes formas de expresión de descontento de los municipios, pueblos y localidades, en general, en contra del sistema de influencia que cada día empezó a ejercer con mayor injerencia y fuerza el gobierno porfirista al imponerles autoridades extracomunidad. Como bien señala Esteban Krotz, “el estudio de los conflictos electorales se encuentra entre la teoría de los movimientos sociales y una nueva corriente de la teoría de la cultura política”. (Krotz: 1990:16).

La documentación consultada permite pulsar la conflictividad intra y extracomunidad subsumida en el acto mismo de sufragar a una autoridad. Luego entonces resulta inevitable, como señala Antonio Annino, elaborar una historiografía de los procesos electorales que sea capaz de dar cuenta de aquellos asuntos que reflejan la autonomía de la estructura social. (Annino: 1995:182.) Las investigaciones en torno al tema de las elecciones, a nivel municipal para el México decimonónico, son escasas y presentan diferentes matices de interpretación. Por ejemplo, Antonio Annino tiene la idea de que hubo un sincretismo entre el

sistema tradicional de elegir autoridades al interior de los pueblos indígenas y el sistema liberal instaurado a partir de las Cortes de Cádiz. (Annino: 1995:182.)

Otro argumento es el de Peter Guardino, cuando dice que en el siglo XIX los indígenas de algunas comunidades se apropiaron de argumentos claves del derecho liberal convirtiéndolos en parte de la ética indígena al servicio comunal; planteamiento interesante, pero no coincido con él cuando dice que el encuentro entre la costumbre local y el derecho liberal cambió a las comunidades indígenas de manera fundamental. (Guardino: 2000:120) Y aunque su aporte es importante cuando señala tanto los aspectos que permanecieron, como la identidad corporativa, así como los elementos de cambio, no estoy de acuerdo cuando dice que un cambio fundamental fue la pérdida de privilegios y la posibilidad que tuvieron los jóvenes para acceder a los cargos de autoridad. Su afirmación es parcialmente cierta ya que ni “los principales” perdieron totalmente sus privilegios e igualmente los jóvenes siguieron accediendo ocasionalmente al poder, sobre todo cuando se incrementó el interés por el voto universal; ellos, los jóvenes, fueron los más interesados en instaurar los colegios electorales y subvertir la costumbre en donde sólo se podían elegir a aquellos personajes que ya hubieran recorrido todo el escalafón del sistema de cargos. Por lo tanto eran actores de edad considerable. La diferencia fue que el sistema liberal permitió legalizar “las revueltas de macehuales” o proceso de macehualización. Es decir, el mecanismo mediante el cual, en el siglo XIX, los jóvenes cambiaron viejas estructuras.

En este orden de ideas, resulta atractivo el planteamiento de James Sanders cuando dice que “las comunidades indígenas rechazaron la oferta maniquea de los liberales y reclamaron una ciudadanía (y un republicanismo) que no excluía su identidad indígena, sino que más bien buscaban protegerla dentro de la nueva Nación”. (Sanders: 2007:30.) Al mismo tiempo podemos acercarnos al planteamiento de Guy Thompson, retomado por Raymond Buve sobre el pragmatismo político con el que se conducían las comunidades indígenas y que les permitió elaborar “una gama amplia de actitudes, desde la resistencia pasiva e ignorar los mandamientos hasta el escoger elementos *a la carte* y utilizar en su favor la ley.” (Buve: 2007:91-121) ¿Qué tan cercano resulta este planteamiento al de Guardino cuando señala que hubo una acogida muy selectiva del nuevo orden legal o al de Acevedo sobre las prácticas ciudadanas híbridas? (Acevedo: 2008:256.) En el caso oaxaqueño, vamos a demostrar que los pueblos indígena en algunas ocasiones nombraban a sus autoridades por el método de usos y costumbres y en otros momentos las sufragaban por medio del voto depositado en las urnas, es decir según la coyuntura social y política que atravesara la comunidad. Estos dos sistemas los encontramos en los extremos de la concordia y del conflicto, pero en medio y en diversos

lugares también localizamos diferentes combinaciones híbridas. De cualquier forma, la alternancia entre el sistema “moderno” y el sistema por “usos y costumbres” no implicó una transición

En el México independiente, la nueva legislación liberal decimonónica no impactó de inmediato ni tan profundamente a la sociedad indígena en las localidades ubicadas en las entidades federativas con un alto índice de grupos étnicos, como sucedió en el centro y norte del país. Contra lo que pudiéramos pensar, parece que durante las primeras décadas del siglo antepasado existieron más continuidades que cambios en la estructura social y política de los pueblos indígenas. Los grandes cambios ya se habían dado con el régimen colonial, al liberalismo decimonónico le tocó la consolidación de instituciones tanto españolas el municipio, como las mayordomías, como las liberales: la ciudadanización de la población y todo lo que ello implicó: participar en los comicios por medio de voto directo, participar en las milicias, pagar nuevos impuestos y acudir a la escuela.

Desde los primeros años de la república liberal, Las comunidades tuvieron un proceso de agrupación y disgregación en diferentes unidades político – administrativas, como producto del procedimiento de municipalización de las Repúblicas de Indios. Así, la creación de ayuntamientos sancionada por la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 y la nueva forma de elección de las autoridades emanada del liberalismo que habría de representarlos ante el gobierno estatal y nacional, generaron reacomodos en la organización interna de los pueblos indígenas. (Constitución Política del Estado libre de Oaxaca, 1824)

Sin embargo y a pesar de los grandes cambios legislativos nacionales, las Repúblicas de Indios sobrevivieron, por lo menos en Oaxaca durante toda la primera mitad del siglo XIX. Su constitución estatal de 1825 legisló en torno a los nuevos ayuntamientos, pero reconoció la existencia de ellas en los pueblos de menos de “3 mil almas”. Una de las razones fue que se trataba de comunidades distantes y dispersas en una orografía muy agreste, lo cual impidió que el gobierno estatal y nacional tuviera control sobre ellas.

Las legislaciones estatales: cuáles dieron el voto directo, cuáles no y cuándo sí. Puebla sí desde 1857, parece que Chiapas. No así en Veracruz y el Estado de México, pero parece que ante el temor de darles autonomía política a través de elegir a sus autoridades, y por la imposibilidad de organizar todos los colegios electorales, los pueblos se las ingeniaron para seguir eligiendo a sus autoridades a través del sistema de usos y costumbres.

De esta manera los pueblos recuperaron en la cotidianeidad su autogestión, una relativa autonomía y al paso del tiempo, hacia la segunda mitad del siglo XIX cuando las autoridades estatales prohibieron definitivamente la existencia de las repúblicas de indios, los pueblos crearon un doble juego: al interior transformaron su estructura pero no el sistema de gobierno. Es decir, se apropiándose de la institución municipal, sólo en la forma pero no en el fondo. Lo readecuaron a su costumbre y, al exterior se adaptaron a las nuevas circunstancias y al sistema político nacional.

Durante este proceso decimonónico y aún desde antes, en los ayuntamientos con mayor auge económico, las autoridades étnicas empezaron y a veces desde antes, a ser remplazadas por criollos y mestizos. Este tránsito fue diverso en el país incluso al interior de las diferentes regiones de Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Estado de México, pero lo significativo es que a pesar del rejuego de grupos sociales en los ayuntamientos y a pesar de las disposiciones asentadas en la primera constitución nacional de 1824 sobre la disposición de homogeneización de la población, las élites indígenas continuaron en la esfera del poder y con una representación étnica en diversas regiones de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y el Estado de México. (Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos Sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, 1824:62.) Que, hacia finales del siglo XIX algunos de ellos terminaron por ladinizarse, perder representatividad étnica y enfrentándose política y económicamente a su base social.

Durante la adecuación y transformación del sistema de gobierno indígena, los pueblos generaron una doble cultura, una: al exterior modernizaron su nomenclatura de mandos, acorde con el sistema político nacional, no así al interior. Tras muchas presiones y enfrentamientos, aceptaron y asumieron el nombramiento de un presidente municipal para articularse con el sistema político nacional y para tener un interlocutor con el nuevo Estado mexicano. Pero al interior de las comunidades construyeron otra lógica de organización y de reproducción del poder; propia de las comunidades indígenas, y cuyas instituciones hoy todavía sobreviven en muchos lugares de México y a la cual los antropólogos le han denominado “sistema de cargos”. El sistema de cargos es un sistema de gobierno indígena escalafonario, con articulación de la estructura política, social y religiosa. Las funciones e importancia de cada una de ellas estaban determinadas por lo simbólico y sostenidas por el status social.

A pesar de que el Estado nacional separó expresamente, en 1857, a la Iglesia del Estado, en la práctica cotidiana de las comunidades indígenas el orden de lo político y de lo religioso reapareció mezclando funciones; producto de la conjunción de elementos de la

organización político-religiosa prehispánica, del sistema de gobierno y de la religión católica impuesta por los españoles. Ante la ausencia de curas en la mayoría de los pueblos de las serranías del país, la religiosidad autóctona salió de la clandestinidad (en la época independiente), y con la secularización de las instituciones, reaparecieron lo ritual y lo religioso acompañados de la mano de lo político. (Reina, 2000:245-277.) Este gobierno indígena que se gestó en los ochocientos, se articulaba a través de la institución municipal, en cuya cabeza se encontraba el presidente municipal; personaje que se convirtió en un actor político de suma importancia ya que vino a sustituir, en términos políticos y de representación ciudadana, al antiguo gobernador de las Repúblicas de Indios. El cual gozaba de representación étnica, estatus, y respeto atávico.

### **Elección por “usos y costumbres”**

Con las políticas liberales los pueblos crearon una nueva forma de negociación y adaptación a la sociedad global por medio de la figura del presidente municipal. Mucho se ha escrito en torno a la exclusión de los indígenas en los procesos electorales debido a su no calificación constitucional en tanto “ciudadanos”.

Sin embargo, para la elección de autoridades municipales la práctica política fue diferente y en algunas entidades federativas también lo fue en materia legislativa. La Constitución de Oaxaca de 1825 reglamentó que las elecciones para municipios fueran directas y en el caso de Puebla, Esto se definió de igual forma en la de 1857. Sólo la Constitución de Oaxaca y a diferencia de las otras entidades federativas, constituye un caso ejemplar en la historia jurídica, ya que desde 1857 concedió que la elección de autoridades municipales se efectuara de manera popular y directa y que los pueblos tuvieran su propio municipio aunque sólo tuvieran 500 habitantes. (Constitución Política del Estado de Oaxaca, 1857: 19.) Con ello se adelantó 50 años a la ley electoral nacional.

No se legisló de la misma forma en los del Estado de México y Veracruz, incluso pusieron candados en los derechos para poder elegir y ser electos, tales como el poseer “modo honesto de vivir” o el de poseer una finca. Sin embargo las élites indígenas de las regiones con potencial económico se las ingeniaron para participar en la designación de representantes políticos ante las autoridades estatales. Esta elección la realizaban por “usos y costumbres” pero como no estaba reconocida por la ley electoral, las pequeñas localidades la efectuaban de manera clandestina o disfrazada. La base documental de estas afirmaciones corresponde a la etnografía antigua del estado de Oaxaca y fue consultada en el archivo

histórico de Manuel Martínez Gracida, gobernador porfirista del estado de Oaxaca, resguardada en la Biblioteca Genaro V. Vázquez, Colección Manuel Martínez Gracida, en adelante CMMG.

Existía y siguen existiendo diversas formas de elegir a las autoridades indígenas por usos y costumbres, ya fuera por “mano alzada”, por consenso abierto o restringido, por consenso por aclamación, por rotación de representantes de los barrios del pueblo o por designación de un cuerpo de notables o “principales” o “consejo de ancianos”. Estas fueron algunas de las diferentes prácticas de elección de representantes étnicos que encontramos en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz en el último cuarto del siglo XIX.

Aún al finalizar el siglo antepasado, continuaron efectuando sus elecciones tres meses antes de lo que marcaba la ley y consistía en una actividad muy ritualizada y con muchos rasgos que permanecieron del periodo colonial. Y aunque en algunos lugares el consenso era relativo, ya que al presidente lo designaba el cuerpo de notables”, de cualquier forma el conjunto de la localidad se sentía representado y por ello sancionaban la decisión en una asamblea consensuada.

ETNOGRAFÍA.- Este ritual implicaba derrama de recurso, por ello lo realizaban después de levantar la cosecha de maíz. Por ejemplo, en algunos pueblos zapotecas, lo del distrito de Juchitán, los días 22 de septiembre hacia mediodía se reunía el grupo de notables o “principales” del pueblo y según dice la fuente documental, elegían “por aclamación” a un presidente municipal, un alcalde y dos regidores (o consejeros), dos mayores (o jefes que servían de puente con el sistema religioso y controlaban el dinero de la iglesia para la administración de las haciendas o tierras del santo) y un juez de mando (organizador de la contribución de la población para el culto: en dinero, especie o trabajo). Esta elección se discutía entre ellos y finalizaba hasta que llegaban a un acuerdo por consenso. La decisión final la guardaban en secreto hasta el primer domingo de diciembre, fecha designada por el colegio electoral para efectuar las votaciones. En ese momento el ayuntamiento informaba a la cabecera del distrito los resultados de la “votación” como si se acabara de efectuar el sufragio en las urnas. (CMMG, Informes de los presidentes municipales al gobernador, 1880.)

Una vez que estas autoridades quedaban ratificadas por la cabecera municipal o por las autoridades del estado, el ritual continuaba en los pueblos y se sancionaba por medio de un acto religioso. El 25 de diciembre el alcalde electo se dirigía muy temprano a la iglesia y postrado ante la imagen de su santo patrono, imploraba su protección y consejo para “desempeñar fielmente el encargo que su pueblo le confería para gobernarlo”. El acto se ratificaba frente al santo del pueblo, y se hacía una ceremonia. El acto no sólo legitimaba al

presidente municipal frente al pueblo sino que también le daba cohesión e identidad a la comunidad. Lo primero porque todo el pueblo se unía en torno a un ritual que además formaba parte del ciclo anual festivo. También le daba identidad al pueblo porque la ceremonia se hacía frente al santo de la iglesia, el cual le daba auto-adscripción a la gente, ya que en aquella época las autoadcripciones identitarias eran patronales y no étnicas. Con ello se cerraba el círculo entre lo político, lo religioso y lo social. (CMMG, Información sobre la etnografía mixes: volúmenes 64, 65 y para cuicatecos en el vol. 14.) (Annino, 1995:16)

Los ciclos y circunstancias en las que las localidades designaban a sus autoridades por consenso según la documentación, parecen indicar que coinciden con periodos de relativa estabilidad, armonía o concordia al interior de los pueblos. En cambio, parece y habrá que constatar la hipótesis en un estudio sistemático y de larga duración a lo largo de todo el siglo XIX, que los pueblos preferían la forma de elección liberal cuando la autoridad dejaba de atender la representación y los intereses del grupo étnico o bien cuando los jefes políticos les imponían una autoridad extracomunidad. Ante esta situación, los pueblos apelaban a su derecho ciudadano de sufragar por voto directo y secreto para demostrar legítimamente, la voluntad de la mayoría para ser representados ante las autoridades estatales.

### Elecciones liberales o “ciudadanas”

Las fuentes documentales sobre la población indígena en el siglo XIX son escasas, pero de entre ellas, no las que rinden cuenta sobre el número de electores o quién gana las elecciones, sino aquellas que nos permitieron explicar y analizar cuándo y por qué vota la población. Con ellas pudimos acercarnos a analizar la participación de los pueblos indios en los comicios municipales desde la perspectiva de los conflictos poselectorales, fenómeno que dejó un buen registro en la prensa estatal y nacional y en el propio archivo del presidente en funciones durante este periodo, Porfirio Díaz (1876-1910).

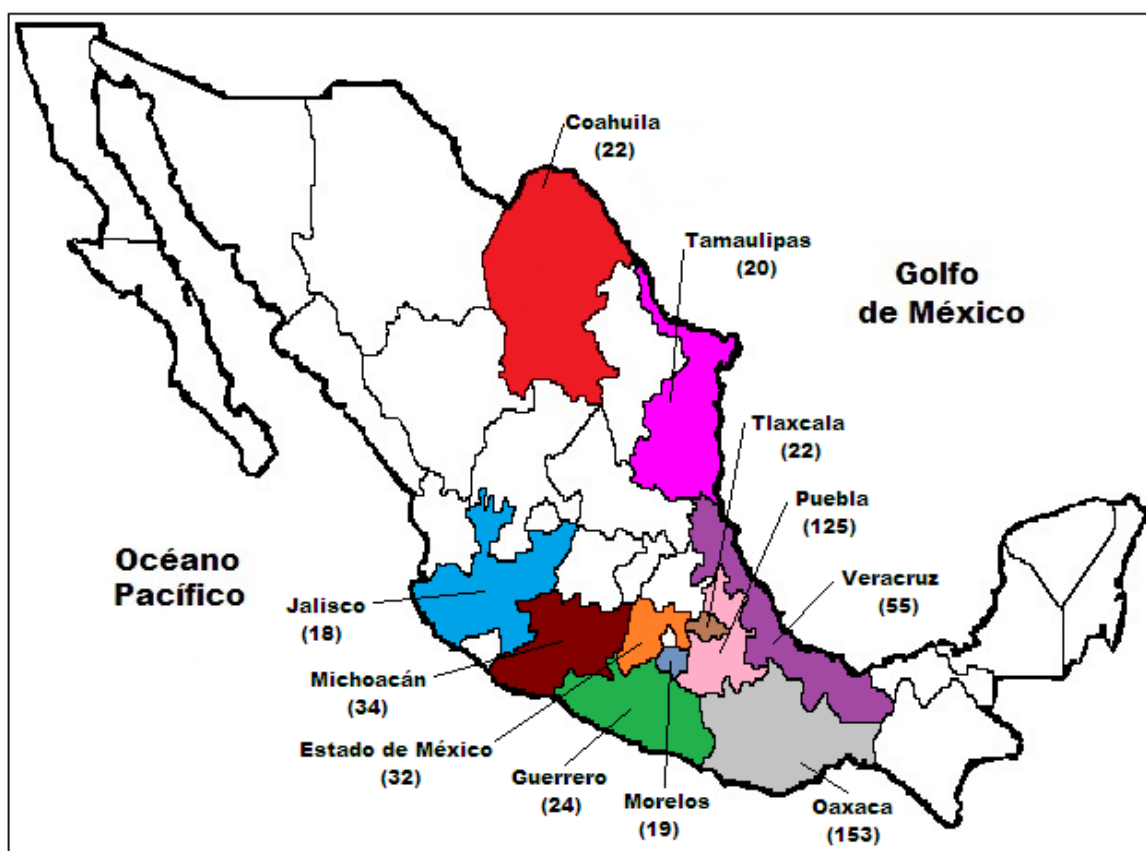
Estas fuentes documentales arrojaron información muy interesante sobre la compleja problemática social, económica y política que había atrás del mismo hecho de sufragar a una autoridad o de asistir a las urnas. De modo que los datos permitieron conocer el conjunto de problemas que se entrelazan antes, durante y después de las luchas por nombrar a sus representantes. En el centro de las movilizaciones y conflictos aparece la elección del presidente municipal como actor principal, ya que éste se convirtió en la pieza clave del engranaje del sistema político. Esta situación nos plantea un problema de actores intermedios,



debido a que éste no representaba a los individuos sino a una colectividad, es decir, servía de puente o interlocutor entre dos sistemas de representación y de organización social y política.

Entre 1880 y 1910, de 439 conflictos registrados en las localidades rurales de todo el país, la mitad fue por denuncias de corrupción o injusticias por parte de las autoridades locales, jefes políticos y/o rechazo a las reelecciones de gobernadores. La tercera parte correspondió a los conflictos postelectorales, producto del fraude en los comicios locales y, sólo la quinta parte corresponde a levantamientos que se manifestaron explícitamente como defensa de los recursos naturales (tierras, agua y bosques), así como protestas en contra del incremento de las contribuciones. Es interesante notar que después de setenta años de intensa lucha agraria, al finalizar el siglo xix y el cambio a la siguiente centuria, la protesta y el enfrentamiento entre grupos se caracterizaron por tener un carácter marcadamente político y electoral.

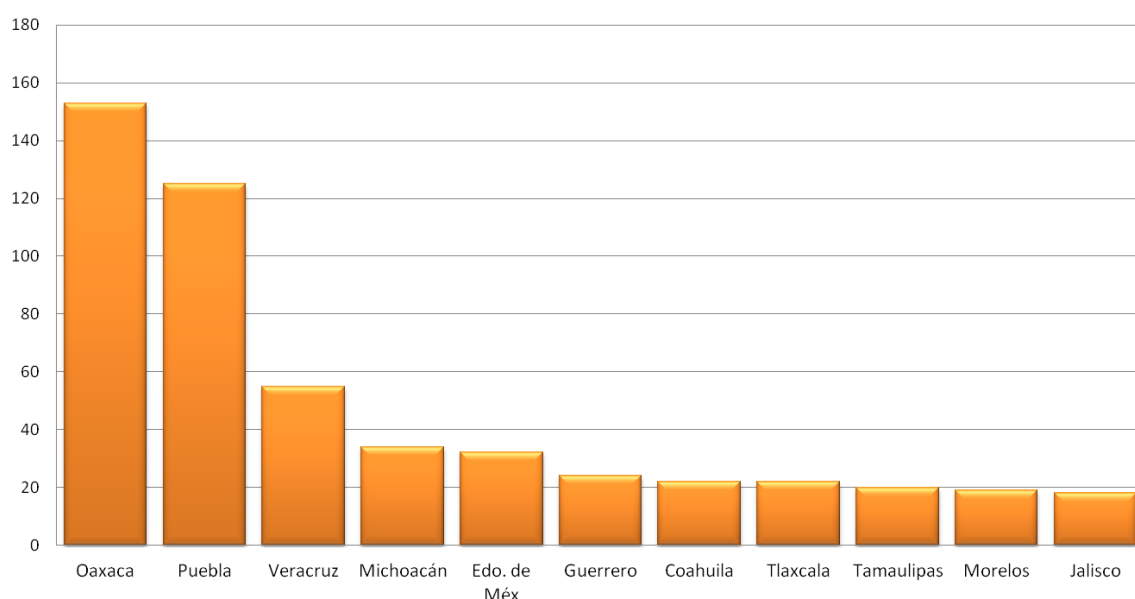
#### **DISTRIBUCIÓN DE LOS CONFLICTOS POSELECTORALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA**



**Elaboración propia a partir de: Colección Porfirio Díaz (CPD), de 1880 a 1911; Hemeroteca Nacional (HN), Diario del Hogar, 1884-1910; El Tiempo, 1884-1910; El Hijo del Ahuizote, 1885-1903; El Siglo XIX, 1889; El Imparcial, 1899-1902 y 1909-1910; El Nacional, 1896, 1900, 1901.**

La distribución regional de los conflictos electorales es muy significativa pues la zona centro-sur del país fue la región de mayor combatividad. Sólo en los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Estado de México sucedieron un poco más de la mitad de los conflictos registrados, el resto se distribuyó en otras veintidós entidades federativas. Como dato curioso y para nuestra sorpresa, éstos son los mismos estados, quitando Guerrero e incluyendo Chiapas, que en el año 2000 tuvieron el mayor número de presidentes municipales afiliados a la oposición de izquierda.

#### **ENTIDADES FEDERATIVA CON MAYOR NÚMERO DE CONFLICTOS POSELECTORALES**



En cambio, no llama la atención que sea en la región centro-sur en donde se presentó el mayor número de enfrentamientos, pues es la parte del país en la que se establecieron cacicazgos de tipo tradicional, producto de fuertes poderes regionales, formados con los ex combatientes de las filas insurgentes más radicales que lucharon en la Independencia. También de ahí salieron los contingentes que abrían de luchar en las subsecuentes guerras: Ayutla, la Guerra de Tres años y Tuxtepec, y no se diga en las dos intervenciones extranjeras:

la de Estados Unidos de 1847 y la francesa de 1867. Los cuadros políticos que un día fueron los libertadores, obtuvieron prebendas y privilegios y, al paso del tiempo, se aferraron al poder y se convirtieron en caciques locales o regionales. Basta con leer la amplia bibliografía que existe sobre los movimientos revolucionarios en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Estado de México, en ella se encuentra historiado el conflicto con los caciques locales y regionales. A la nueva generación le tocó luchar contra estos viejos excombatientes. Esto no niega la agudización de las contradicciones entre las clases sociales y la lucha que se generó entre ellas, pero sí complementa, complejiza y enriquece el análisis.

La lucha de los pueblos y comunidades indígenas contra el fraude electoral se debió a dos situaciones diferentes, contrarias pero ambas producto de una misma política autoritaria. En general, una de ellas se debió a la impugnación de los viejos caciques por parte de su propia comunidad, y la otra, al desacuerdo de los pueblos contra la imposición de autoridades extra-comunidad. En muchas ocasiones eran impuestas por los jefes políticos.

En el primer tipo de conflictos, se trataba de autoridades que habían perdido la representación étnica y política del pueblo porque actuaban con injusticia, al tiempo que se prestaban a la corrupción y con ello permitían que autoridades estatales y/o federales cometieran atropellos contra la gente del común. Estos presidentes municipales, convertidos en caciques, se habían perpetuado en sus gobiernos locales con el apoyo de los jefes políticos, a los cuales les servían de instrumento para aplicar un capitalismo “salvaje” o para instrumentar las políticas agrícolas y agrarias que pretendían terminar con la comunidad. Frente a esta situación, se organizaron los comuneros en contra de los caciques para evitar que se siguieran reeligiendo como lo habían venido haciendo en los últimos años. Esta movilización “ciudadana” fue por medio de la defensa del voto y de la voluntad popular, la cual dio impulso o fuerza a la renovación de cuadros que clamaban por un espacio político; fue la lucha de una nueva generación o bien, producto de lo que hemos llamado la *cíclica macehualización* del poder. Lo revelador e importante a destacar es que en la primera década del siglo XX los pueblos lo intentaron por la vía del sufragio

Los conflictos se expresaron de diferente forma y con distinta intensidad en las regiones de los estados con presencia del mayor número de conflictos:

Complejidad de los conflictos poselectorales también tuvieron diferente fuerza y expresión en las distintas regiones. La diversidad étnica y ecológica de su territorio produjo diferentes historicidades y por lo tanto, al llegar el fin de la centuria, tuvieron distintas dinámicas frente a los conflictos poselectorales.

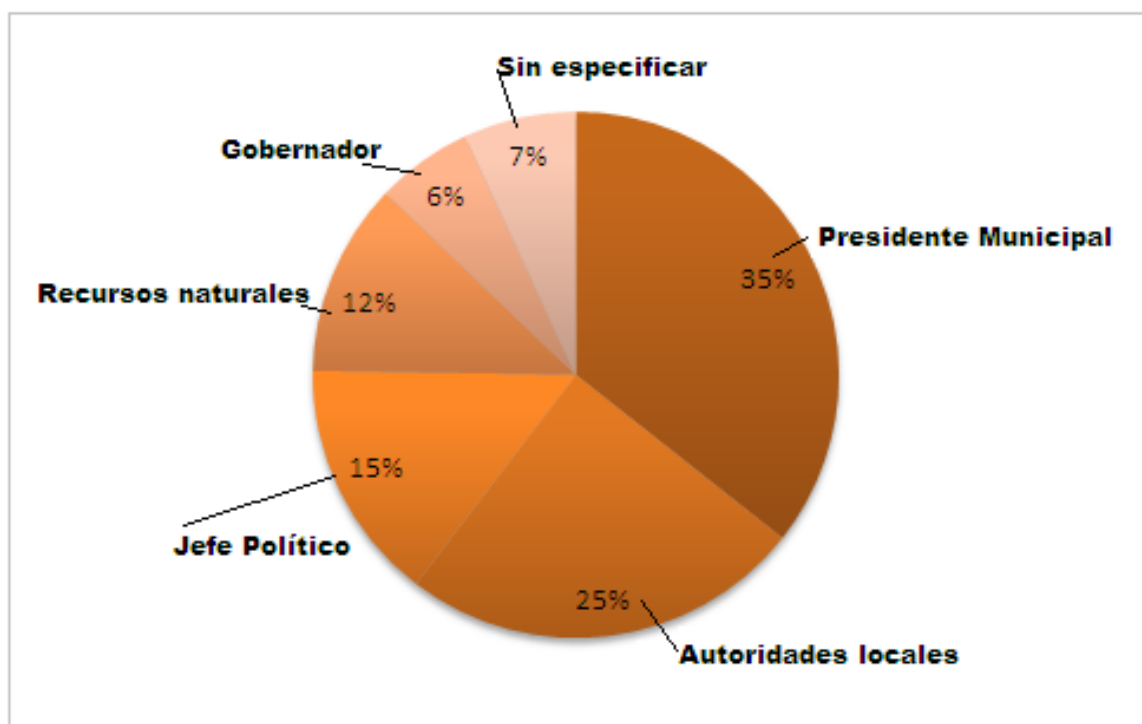
Como se muestra en la gráfica de Oaxaca, las regiones con mayor número de conflictos fueron la Sierra Norte y el Istmo, a las cuales le siguieron los Valles Centrales y la Costa. La Sierra Norte es una denominación convencional con la que se conoce la parte alta de la Sierra Madre de Oaxaca, desde las vecindades de la Cañada hasta el Istmo. (Reina, 2004:40.) La alta incidencia en las dos primeras se debió en parte porque hubo un fuerte desarrollo económico y comercial, sobre todo hacia el final de la centuria. La diferencia fue que la Sierra Norte tiene un relieve muy abrupto y con una superficie muy reducida para la agricultura, pero en compensación se desarrolló la minería (caso raro en el estado de Oaxaca) y un fuerte comercio hacia el valle de Tlacolula en el sur, hacia Valle Nacional y el río Usumacinta por el norte en el estado de Tabasco y que desemboca en el Golfo de México.

Es en esta región, en diferentes municipios de la Sierra Norte, principalmente en el distrito de Ixtlán, se dio el mayor número de conflictos de todo tipo a causa de un fuerte cacicazgo mestizo sostenido por la familia Meixuero, en particular por Guillermo, quien imponía a los presidentes municipales para apropiarse de terrenos comunales y cobrar “impuestos” indebidos a la población; es más, llegó a controlar al jefe político. La situación se repitió durante mucho tiempo como lo muestran las cartas que los indígenas enviaron al presidente Porfirio Díaz denunciando la situación.

Pero había una constante entre todas las diferentes regiones que se movilizaban en torno a los sufragios de su autoridad municipal: guardaban de acuerdo a la ley, la instauración del colegio electoral, el acudir a las urnas, denuncia de la inconformidad por los resultados del escrutinio y el desencadenamiento de los conflictos postelectorales. Otra constante es que en la mayoría de este tipo de conflictos poselectorales las localidades estaban encubriendo o subsumiendo los viejos problemas agrarios no resueltos. A ello habría que agregar los nuevos enfrentamientos con la figura del jefe político, quien era el brazo armado y directo del ejecutivo para controlar a la población rural. En ellos, también encontramos variantes como: queja de alza de impuestos, malos tratos o injusticias por parte de su propia autoridad étnica. (Falcón, 1992)

El tipo de conflictos agrarios fue diverso pero lo interesante es que todos ellos estaban entrelazados y solamente se iban expresando de una u otra manera según la coyuntura.

## CAUSAS EXPRESADAS EN LOS CONFLICTOS ELECTORALES



Elaboración propia a partir de: Colección Porfirio Díaz (CPD), de 1880 a 1911; Hemeroteca Nacional (HN), Diario del Hogar, 1884-1910; El Tiempo, 1884-1910; El Hijo del Ahuizote, 1885-1903; El Siglo XIX, 1889; El Imparcial, 1899-1902 y 1909-1910; El Nacional, 1896, 1900, 1901.

De 154 conflictos, el 36% se expresaron clara y francamente por la elección del presidente municipal que representaría a la comunidad el siguiente año; el 25% por quejas de las autoridades locales que habían dejado de representar los intereses étnicos; el 15% en contra del jefe político que controlaba las elecciones y los recursos naturales; para esta época era infrecuente expresar una lucha por los recursos naturales pero aún así hubo un 12% de casos; por supuesto, sólo se tiene un 6% de casos de conflictos en contra del gobernador, personaje distante de las comunidades indígenas; y al final queda un 7% de conflictos en donde hay diferentes causas y no hay algún elemento dominante que sobresalga.

De modo que en la mayor parte de los conflictos (82%) domina el problema político, como fueron las cuestiones electorales, problemas contra el jefe político, enfrentamientos con otras autoridades de la localidad o del gobernador. En cambio los asuntos relacionados con los recursos naturales (tierra, agua, bosques) tan solo suman un 12% del total. No obstante, es importante destacar que en cada conflicto se conjugaba más de un elemento y no se puede hablar, en la mayoría de los casos, de causas únicas. En el fondo la explicación es que los pueblos no acabaron por dissociar la esfera de lo político, con lo social, lo económico e incluso

con lo religioso. E incluso, al ser la tierra la fuente de reproducción de la cultura agraria, los comicios terminaban encubriendo problemas agrarios y relaciones de poder.

Así, las urnas se convirtieron en la única vía legal para volver a tener un representante étnico o identificado con el malestar o demandas de la mayoría y que les ayudara a resolver el conjunto de dificultades que aquejaban a los pueblos indígenas. Por ello, la principal característica de este periodo porfirista, a diferencia del resto del siglo XIX, fue la renovación de ayuntamientos que eran manipulados por jefes políticos y/o autoridades estatales en contra de los candidatos “populares”. En el agro mexicano, estos mandos se habían convertido en piezas claves para destituir a las autoridades étnicas, despojar a los pueblos de sus bienes comunales y arremeter contra las mayordomías y fiestas religiosas, con la intención de destruir la organización social indígena.

Como la impunidad de estos personajes no tenía límites, los indígenas optaron, con una tendencia creciente, por el sistema liberal de comicios para tener las armas legales del fraude electoral. Apelando a su autoridad, los jefes políticos tenían total injerencia en los procesos electorales. Por ello los pueblos indígenas conocedores de la legislación electoral y de sus derechos ciudadanos, no solo instauraban el colegio electoral, hacían el padrón, registro, boletas e introducción de boletas en las urnas, sino que también denunciaban la situación a la prensa. Todo esto lo hacían con el objeto de contrarrestar la injerencia de los jefes políticos en los procesos electorales. Por ello, en ocasiones, las denuncias sobre el fraude electoral terminaban en revueltas y motines

Éstos expresaban una de las dos situaciones conflictivas que solía haber en torno a los comicios para presidente municipal: a) queja o denuncia por la imposición de nueva autoridad extracomunidad por parte del jefe político. Es decir, el intento o la remoción de una autoridad étnica. O b) porque la comunidad deseaba remover a una autoridad que dejaba de representar los intereses étnicos.

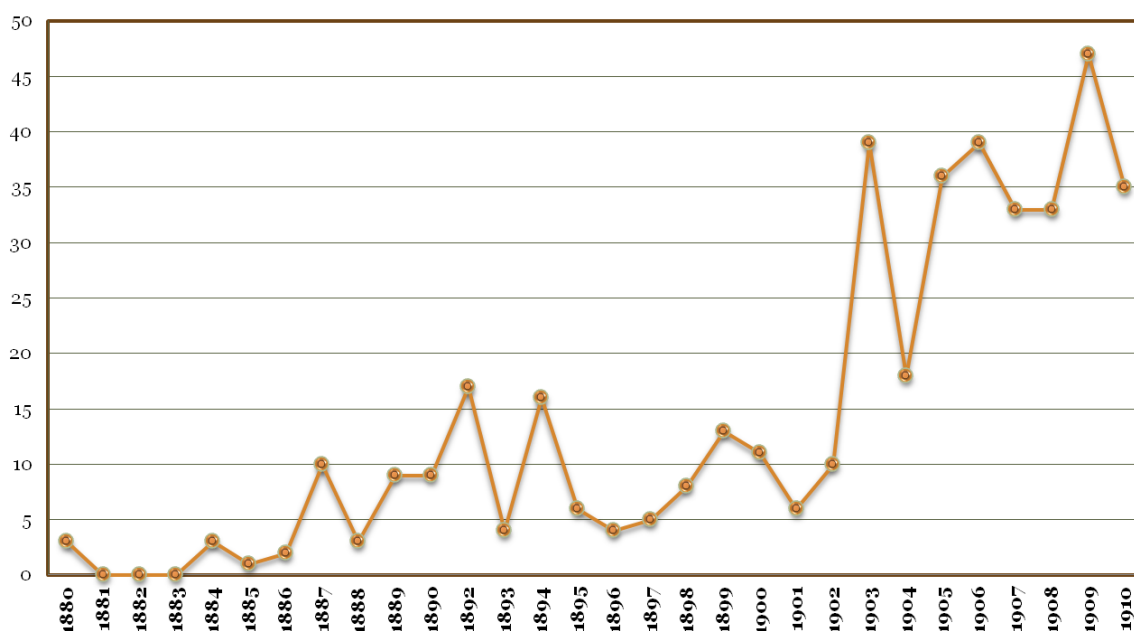
El otro tipo de conflictos poselectorales sucedió cuando las autoridades comunitarias o los caciques indígenas llegaban al extremo de la impunidad, provocando una crisis de representatividad, que unido a otros elementos de ingobernabilidad generaron crisis políticas. Bajo estas circunstancias, en muchas ocasiones se generó un proceso de *macehualización* de la estructura de poder o renovación de viejas estructuras.

En este fenómeno se expresan tres aspectos íntimamente relacionados: 1) la excesiva concentración de poder por parte de las autoridades étnicas y sobre todo la separación de los intereses de éstas con respecto a los intracomunales; 2) el enriquecimiento unido a las

actitudes injustas de los presidentes municipales; y 3) una pugna generacional de los jóvenes y de los grupos emergentes por acceder al poder. Esto último no implica sustituir el análisis de la lucha de clases, solamente lo complementa. En esta problemática y cuando el poder local no sólo estaba anquilosado sino coludido con las instancias que eslabonan o articulan el poder hacia arriba, los pueblos también encontraron otra opción y fue la de organizarse y acudir a las urnas para expresar su voto ciudadano a favor de un candidato que realmente encarnara sus intereses.

El control político de los municipios con escasos recursos económicos, con población indígena y aún bajo el control de caciques o presidentes municipales que envejecieron en el cargo provocó una fuerte desestabilización política en el umbral del siglo XX. Las quejas y demandas de las comunidades se multiplicaron porque estos personajes no permitían que las nuevas generaciones accedieran a la esfera del poder político. Éstos estaban encarnados en un grupo de ancianos que se perpetuaron en las instancias de gobierno local, pero también es el fiel reflejo del envejecimiento de los gobernantes de todo país y la esclerotización del mismo sistema político.

### CONFLICTOS ELECTORALES LOCALES, 1880-1910



Si bien los pueblos mantuvieron dos diferentes formas de sufragar a sus autoridades a lo largo de todo el siglo XIX, parece que los momentos de crisis política invitaron a la población indígena a ejercer su derecho ciudadano, como lo muestra la gráfica y que se vivió

al final del Porfiriato. La información muestra una tendencia creciente de la participación ciudadana o preferencia por el sistema electoral liberal, sobretodo en comunidades rurales en torno a las elecciones locales para nombrar a sus presidentes municipales, instaurando los colegios electorales y una marcada preferencia del sistema de urnas hacia los años que antecedieron a la Revolución de 1910.

### Reflexión final

La instauración del sistema liberal en la joven República Mexicana representó una esperanza u opción para la población indígena de asegurarse la representatividad de sus autoridades. Sobretodo cuando las comunidades rebeldes perdieron sus aliados y se agudizó la represión y los sistemas de control político, los pueblos vislumbraron el beneficio de ejercer sus derechos ciudadanos por medio de las urnas y como forma de negociar con un poder regional o federal mayor.

Hasta el momento, no se puede asegurar cabalmente que los pueblos indígenas decimonónicos nombraran a sus representantes ante el sistema político nacional por medio del sistema tradicional de “usos y costumbres” en los momentos en los que existía una cierta armonía en las relaciones sociales y políticas al interior de las comunidades y que en cambio optaban por el sistema electoral del voto secreto y directo cuando el equilibrio intra y extracomunidad se rompía. Pero sí podemos confirmar que hay una alternancia de los dos sistemas a lo largo del siglo XIX y que los pueblos indígenas optaban por uno u otro de manera coyuntural. Ambos sistemas los usaron como un menú incluido en la carta del régimen político liberal.

Ninguno de los dos sistemas permaneció puro y los pueblos indígenas fueron creativos en crear diferentes formas híbridas de representación política, pero ellos optaron por un núcleo duro de rituales de uno u otro sistema electoral, ya que simbólicamente tenían un significado diferente. En sentido político ambos sistemas expresan dos caras de la misma moneda porque para los pueblos indígenas uno y otro les sirvió para integrarse al sistema nacional y defender sus derechos étnicos-ciudadanos y su identidad territorial

El hecho de que las comunidades votaran en las urnas y la posterior exigencia de su población para que respetaran su derecho de ciudadanos no excluyó o nulificó su identidad indígena, sino la vigorizó. Es más, el sistema liberal y su conjunto de leyes generaron una paradoja: a lo largo del siglo XIX los pueblos indígenas se apropiaron de la institución municipal y la readecuaron en su organización interna para fortalecer sus lazos corporativos y



sobrevivir a los embates del liberalismo que profesaba brutal interés por desaparecer la organización comunal de los grupos étnicos.

En realidad, al inicio del periodo republicano los pueblos indios tenían una cultura política y prácticas sociales y culturales diferentes, pero aprendieron a jugar con las reglas del sistema político liberal nacional. A pesar de lo que se ha dicho sobre el tradicionalismo y el conservadurismo de los pueblos indígenas, ahora podemos afirmar que tuvieron una gran capacidad de cambio y adaptación a las circunstancias.

Igualmente podemos concluir, cada vez con mayor claridad, que las comunidades indígenas no fueron actores pasivos en el proceso de implementación de los ideales liberales. Por el contrario, hicieron uso estratégico de valores como igualdad y autonomía en aquellos momentos en los que les fue necesario: para la supresión de privilegios heredados, o para contrarrestar los abusos del gobernador y de los jefes políticos. Estos aspectos explican que atrás de las elecciones falsas, fraudulentas o verdaderas, no sólo estuvo en juego la representación política sino un conjunto de problemas agrarios no resueltos, así como la articulación de dos tradiciones diferentes de cultura política y al final de cuentas, la expresión del juego y reacomodo de fuerzas sociales, económicas y políticas por tener el control de los recursos naturales y el control de las transformaciones y ajustes de una sociedad en transición a la modernidad.

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **ARCHIVOS**

**CMMG:** Archivo Histórico de Manuel Martínez Gracida  
Biblioteca Genaro V. Vázquez,  
Colección Manuel Martínez Gracida

**CPD:** Colección Porfirio Díaz  
Revisión sistemática de todos los documentos y legajos del archivo,  
1880-1911

**HN:** Hemeroteca Nacional

## FUENTES PRIMARIAS IMPRESAS

*Colección de leyes, decretos, circulares y demás disposiciones dictadas por el Congreso y gobierno del estado. 1909., 26 tomos, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca.*

*Constitución del Estado de Oaxaca, decretada por el Congreso Constituyente en 15 de septiembre de 1857, con sus adiciones y reformas, Oaxaca, 1907. Imprenta del Estado, en la 2ª. De Murguía, núm 9.*

*Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos Sancionada por el Congreso General Constituyente 1824, el 4 de octubre de 1824, México, Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.*

*Constitución Política del Estado Libre de Oajaca. 1825., México, Imprenta de la Águila, dirigida por José Ximeno,*

*Ley Orgánica electoral del Estado. 1867. Copia íntegra de la edición oficial, Oaxaca, Talleres tipográficos de Julián S. Soto, Promulga el 6 de noviembre de 1857, Impreso.*

Velasco, Alfonso Luis, *Estadística de la República Mexicana*, 1891. México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento.

## PERIÓDICOS

*Diario del Hogar*, 1884-1910

*El Tiempo*, 1884-1910

*El Hijo del Ahuizote*, 1885-1903

*El Siglo XIX*, 1898

*El Imparcial*, 1899-1902

*El Nacional*, 1896, 1900, 1901

## LIBROS

Garner, Paul, 2010. *Porfirio Díaz. Del héroe al dictador. Una biografía política*, México, Planeta,

Guerra, Francisco –Xavier, 1988. *Del antiguo régimen a la revolución*, México, FCE.

Krotz, Esteban, (coord.), 1993. *El estudio de la cultura política en México. Perspectivas disciplinarias y actores políticos*, México, CNCA-CIESAS.

Lameiras, Brigitte B. de, 1973. *Indios de México y viajeros extranjeros*, México, Sep-Setentas.

Pastor, Rodolfo, 1987. *Campesinos y reformas: La Mixteca, 1700-1856*, México, El Colegio de México.

Reina, Leticia, 2004. *Caminos de Luz y Sombra. Historia de los pueblos indios de Oaxaca. Siglo XIX*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) – Instituto Nacional Indigenista (INI).

Signorini, Italo, 1979. *Los huaves de San Mateo del Mar*, México, Instituto Nacional Indigenista.

## ARTÍCULOS, CAPÍTULOS Y DISERTACIONES

Annino, Antonio, 1995. “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en Antonio Annino (coord.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, Buenos Aires, FCE, pp. 177-226.

Beve, Raymond, 2007. “Pueblos indígenas de Tlaxcala. Las leyes liberales juaristas y la guerra de Reforma: una perspectiva desde abajo, 1855-1861”, en Antonio Escobar Ohmstede (coord.), *Los pueblos indios en los tiempos de Juárez*, México, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 91-121.

Chance, John K. y William B Taylor, 1987, “Cofradías y cargos: una perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa mesoamericana”, en *Antropología Suplemento, Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, Nueva Época, Núm. 14, Mayo-Junio, pp. 1-23.

Chiaramonte, José Carlos, “Vieja y Nueva Representación: los procesos electorales en Buenos Aires”, 1995, en Antonio Annino (coord.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, Buenos Aires, FCE, pp. 19-63.

Falcón, Romana, “Jefe políticos y rebeliones campesinas. Uso y abuso del poder en el estado de México”, 1992, en Jaime Rodríguez (ed.), *Patterns of contention in Mexican history*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Book, pp. 243-273.

González Hermosillo, Francisco, 1991, “Historiografía de los cabildos indios”, en *Historias*, México, INAH, núm. 26, abril de, pp. 25-63.

Guardino, Peter, 2000, “‘Me han cabido en la fatalidad’ Gobierno indígena y gobierno republicano en los pueblos indígenas: Oaxaca, 1750-1850”, en *Revista Desacatos*, México, CIESAS, invierno, pp. 119-130.

Krotz, Esteban, “Antropología, elecciones y cultura política”, 1990, en *Nueva Antropología*, vol. XI, núm. 38, octubre, pp. 9-19.

Martínez, Hildeberto, “Organización política y administrativa”, 1984, en *Tepeaca en el siglo XVI. Tenencia de la tierra y organización de un señorío*, México, CIESAS, pp. 125-166.

Reina, Leticia, “Raíces y fuerza de la autonomía indígena” 2000, en Leticia Reina (coord.), *Los retos de la etnicidad en los Estados-nación del siglo XXI*, México, CIESAS – INI - Miguel Ángel Porrúa, , pp. 245-277.

\_\_\_\_\_, “Elecciones locales y crisis en los cambios de siglo: XIX y XX. Cultura política de los pueblos indios”, 2002, en Leticia Reina y Elisa Servín (coords.), *Crisis, Reforma y Revolución. México: historias de fin de siglo*, México, TAURUS – CONACULTA - INAH, , pp. 253-292.

\_\_\_\_\_, “Indianización de las instituciones españolas. Los zapotecas del istmo mexicano en el siglo XIX”, 2007, en Antonio Escobar O., Raúl J. Mandrini y Sara Ortelli, *Sociedades en movimiento. Los pueblos indígenas de América Latina en el siglo XIX*, Tandil, Argentina, IEHS, pp.143-158.

Rus, Jan y Robert Wasserstrom, “Civil religious hierarchies in central Chiapas: a critical perspective”, 1980, en *American Ethnologist*, vol. 7, núm. 3, agosto, pp. 466-478.

Sanders, James, “Pertener a la gran familia Granadina. Lucha partidista y construcción de la identidad indígena y política en el Cauca, Colombia, 1849-1890”, 2007, en *Revista de Estudios Sociales*, Bogotá, Facultad de Ciencias Sociales, n. 26, abril, pp. 28-45.